ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

**REFORMA AL CAPITULO IV SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY N°
9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS**

**DIPUTADA OLGA LIDIA MORERA ARRIETA Y
VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS**

EXPEDIENTE N. °25.101

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES**

PROYECTO DE LEY

REFORMA AL CAPITULO IV SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY N° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS

Expediente N.°25.101

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública constituye una problemática social de creciente preocupación para la ciudadanía y las autoridades locales, en tanto incide directamente en la percepción de inseguridad, el deterioro del orden público y la convivencia pacífica. Esta situación se agrava en zonas urbanas y turísticas, donde la ingesta descontrolada de alcohol en espacios abiertos genera externalidades negativas, incluyendo alteración del orden, contaminación ambiental, violencia y riesgos sanitarios.

Con la entrada en vigor de la Ley N.º 9047 del 25 de junio de 2012, denominada “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, se intentó establecer un marco normativo para regular de forma integral el expendio, consumo y control de dichas bebidas. No obstante, se han generado contradicciones e inseguridad jurídica en cuanto a las competencias administrativas para sancionar el consumo en espacios públicos y ejecutar efectivamente las sanciones previstas en la norma.

El artículo 20 de dicha ley sanciona con medio salario base el consumo de alcohol en la vía pública, y faculta a la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los inspectores municipales a decomisar el producto y levantar el parte correspondiente.

“...ARTÍCULO 20.- Sanciones relativas al consumo en vía pública y sitios públicos

Será sancionada con una multa de medio salario base, la persona que sea sorprendida consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios públicos determinados por la municipalidad.

En estos casos, la fuerza pública, la policía municipal y los

inspectores municipales deberán decomisar el producto y levantar el parte correspondiente...”¹

Sin embargo, en la ejecución la forma en que está redactada la ley ha presentado una serie de problemas jurídicos y operativos:

La Constitución Política indica en el artículo 12 que para la atención de la vigilancia y conservación del orden público habrá las fuerzas policiales necesarias.

“...ARTÍCULO 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias...”²

Mientras por su parte el inciso 16 del artículo 140 que establece los deberes y atribuciones del presidente y ministro de gobierno

“...ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país...”³

Además, en artículo primero de la Ley N° 7410 “Ley General de Policía” establece lo siguiente:

Artículo 1.-Competencia

El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del

¹ Asamblea Legislativa (2012) Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, número 9047 del 25 de junio de 2012. San José: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73058 Recuperado: 08/05/2024.

² Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871 Recuperado: 08/05/2024.

³ ídem

país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas...”⁴

La competencia exclusiva para el mantenimiento del orden público y la seguridad corresponde al Estado, a través de la Fuerza Pública.

El dictamen C-213-2013 de la Procuraduría General de la República, en referencia a una consulta de la Municipalidad de Osa indica que se omitió establecer con claridad el procedimiento para la ejecución de la sanción administrativa, incluyendo el trámite para la imposición de la multa, la destinación del producto decomisado y el rol de las autoridades judiciales y municipales en dicho proceso, lo que ha provocado que desde la promulgación de la ley, muchas municipalidades no han logrado hacer efectiva ni una sola multa por consumo de alcohol en espacios públicos.

“...Nótese que al introducirse un segundo párrafo al artículo, se obligó a la fuerza pública, **la policía municipal y a los inspectores municipales a decomisar el producto y levantar un parte. Sin embargo, ni en las actas legislativas ni en el texto de la ley, se aclaró cuál era la intención de dicha incorporación,** y si el “parte” que ahí se señala debía ser pasado o no a la autoridad judicial con el producto decomisado, para efectos de imponer la multa descrita en la norma. **También se genera confusión, al eliminarse la sección respectiva de “sanciones penales”,** pues a pesar de ello, en la ley finalmente aprobada se mantuvieron dos sanciones de esa naturaleza, sea las descritas en los artículos 21 y 22 (venta ilegal y ventas prohibidas), con el inconveniente de que, al eliminarse dicha sección, quedaron incorporadas a la sección de “sanciones administrativas”, cuando en realidad su naturaleza es otra.

Lo anterior sin duda evidencia una mala técnica legislativa, sin embargo, a criterio de este órgano asesor, la aprobación de esas últimas mociones, no resulta suficiente para considerar que el legislador haya querido desvirtuar la naturaleza administrativa con la que se concibió la multa inicialmente, no sólo porque se le mantuvo en el apartado de “sanciones administrativas”, sino

⁴ Asamblea Legislativa (1994) Ley General de Policía, número 7410 del 26 de mayo de 1994. San José: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=66525#:~:text=Cr%C3%A9ase%20la%20Polic%C3%ADa%20encargada%20del,esos%20delitos%2C%20seg%C3%BAAn%20las%20leyes. Recuperado: 08/05/2024.

también, por lo sucedido a lo largo del trámite legislativo...” (el subrayado y la negrita no es del texto original) ⁵

Además, en las conclusiones de dicho dictamen se estableció en el punto b, lo siguiente:

“...b) Por lo anterior, será cada corporación municipal la encargada de reglamentar lo relativo al cobro de la multa impuesta y la custodia de los bienes decomisados. Ello, sin perjuicio de que el legislador realice una interpretación auténtica o una reforma de la ley...” ⁶

Además, de las competencias antes mencionadas, otro inconveniente en la aplicación de la ley N° 9047, se refiere al hecho de no lograr hacer efectivas las multas establecidas en el mismo artículo 20, por cuanto el procedimiento no es eficiente, dado que no genera los instrumentos jurídicos para que las sanciones pecuniarias ingresen efectivamente a las arcas municipales.

Por otra parte, el artículo 21 de la Ley N.º 9047, indica la sanción relativa a la venta ilegal de bebidas con contenido alcohólico.

“...ARTÍCULO 21.- Sanciones relativas a la venta ilegal

Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico, sin contar con una licencia vigente y expedida por la municipalidad respectiva, recibirá una sanción de entre treinta y sesenta días multa, sin perjuicio del decomiso de los productos, los cuales serán entregados por el ente a los tribunales de justicia...” ⁷

Sin embargo, dicho artículo, no distingue entre las diversas modalidades de venta no autorizada, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata por parte de las municipalidades ante actividades comerciales ilegales en locales físicos. Esta omisión impide aplicar medidas correctivas proporcionales y eficaces, como el cierre

⁵ Procuraduría General de la República (2013). Dictamen C-213-2013 del 8 de octubre del 2013.

Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&nDictamen=17796&strTipM=T

⁶ Ídem

⁷ Asamblea Legislativa (2012) Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, número 9047 del 25 de junio de 2012. San José: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73058 Recuperado: 08/05/2024.

temporal de establecimientos, que permitan disuadir estas prácticas y proteger la formalidad del comercio local.

Esta reforma contribuirá no solo a fortalecer la autoridad municipal en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sino también a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, proteger la salud pública, y consolidar un régimen sancionatorio ejecutable.

Lo anterior, en atención a las competencias que han sido otorgadas a los municipios relacionadas con la fiscalización de la correcta aplicación de la normativa referente al funcionamiento de establecimientos con venta de licor, estipulado en N°3 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N°9047 del 25 de junio del 2012:

ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico

“La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La licencia que otorguen las municipalidades para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico se denominará "licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico" y no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna.⁸
....”

Por tanto, el proyecto pretende adicionar una sanción administrativa en este artículo donde los gobiernos locales puedan actuar de forma inmediata ante la venta ilegal de bebidas con contenido alcohólico específicamente en locales comerciales.

La presente propuesta reforma el Capítulo IV de Sanciones Administrativas, a fin de modificar el nombre del capítulo ya que en el mismo también se encuentran Sanciones Penales, según lo señalado por la Procuraduría General de la República, además se propone que la municipalidad mediante policía municipal puedan coadyuvar con la aplicación de las disposiciones del artículo 20 quienes estarán facultados para ejercer funciones de fiscalización, decomiso y remisión de los casos ante la autoridad judicial, en coordinación con la Fuerza Pública, quien es ente competente.

El proyecto de ley permite adecuar la sanción al nivel de reincidencia del infractor, e incorpora el cierre temporal de locales comerciales como sanción inmediata y

⁸ Ídem

ejecutiva ante la venta ilegal en el artículo 21, en consonancia con las potestades de fiscalización que ostentan los gobiernos locales y se introduzca distinción entre la venta ilegal realizada en locales comerciales que requiere respuesta rápida y la realizada en otros espacios, para mejorar la efectividad normativa.

Asimismo, resulta fundamental que esta reforma se acompañe del fortalecimiento de los canales administrativos de denuncia accesibles y efectivos para la ciudadanía. La participación activa de la población es clave para detectar y sancionar oportunamente las infracciones relacionadas con el consumo y la venta ilegal de bebidas alcohólicas.

Por ello, es indispensable que tanto la Fuerza Pública como las municipalidades cuenten con mecanismos ágiles, digitales y presenciales, que permitan a las personas denunciar estos hechos de forma confidencial y segura. De esta manera, no solo se potencia la capacidad de fiscalización de las autoridades, sino que también se promueve una cultura de corresponsabilidad en la defensa del orden público, la legalidad y la sana convivencia.

Por las razones expuestas someto a consideración de las señoras y señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**REFORMA AL CAPITULO IV SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY
N° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS**

ARTÍCULO 1- Refórmese el Capítulo IV Sanciones Administrativas de la Ley N.°9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, del 25 de junio de 2012 y sus reformas, cuyo texto dirá:

CAPÍTULO IV

SANCIONES

(...)

ARTÍCULO 20.- Sanciones relativas al consumo en vía pública y sitios públicos

Quien sea sorprendido por la Fuerza Pública consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios públicos determinados por la municipalidad, recibirá una sanción entre cinco y veinte días multa; en estos casos, la Fuerza Pública deberá decomisar el producto y levantar el parte correspondiente, los cuales serán entregados a los Tribunales de Justicia.

Las municipalidades que cuenten con cuerpos de Policía Municipal podrán coadyuvar con la aplicación de esta disposición, en coordinación con la Fuerza Pública.

De existir reincidencia será sancionado con una pena de entre 15 a 30 días de prisión, para tal efecto le corresponderá al Juez determinar.

ARTÍCULO 21.- Sanciones relativas a la venta ilegal

Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico en locales comerciales sin contar con la respectiva licencia se procederá con el cierre del establecimiento por un período de siete días naturales.

En aquellos casos en los que la comercialización de bebidas con contenido alcohólico se realice en lugares que no sean locales comerciales, serán sancionados con una multa entre treinta y setenta días multa, sin perjuicio del decomiso de los productos, los cuales serán entregados por el ente a los tribunales de justicia.

(...)

Rige a partir de su publicación.

Olga Lidia Morera Arrieta
Diputada